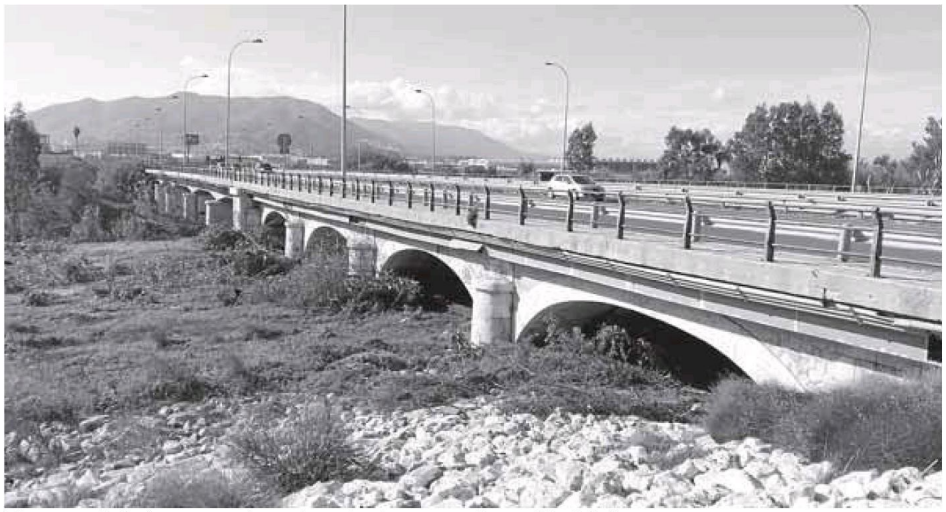

El puente de la Azucarera ejerce de embudo en caso de crecida del río. :: SUR

El Ayuntamiento y la Junta buscan una solución barata a la inundabilidad en el Guadalhorce

FRANCISCO JIMÉNEZ

pjimenez@diariosur.es

Barajan aumentar la capacidad del arroyo de las Cañas y rebajar el cauce del río a la altura del puente de la Azucarera como alternativa a la sustitución del viaducto

MÁLAGA. Ayuntamiento de Málaga y Junta de Andalucía trabajan conjuntamente en la búsqueda de una solución 'low cost' para reducir el riesgo de inundaciones que pesa sobre los polígonos del entorno de la desembocadura del Guadalhorce sin necesidad de esperar a que se acomete la obra decisiva: la sustitución del puente de la Azucarera, el de la antigua N-340, por uno de mayores dimensiones que el actual, ya que sus ojos o vanos son insuficientes para evacuar el agua que discurre por el cauce en caso de crecida, pudiendo actuar de presa y dejar indefenso el polígono Guadalhorce.

Durante la reunión del Consejo Social de la ciudad celebrado ayer en la que se abordaron las carencias de Málaga para dar respuesta a fuertes precipitaciones, el alcalde desveló algunas de las soluciones que se plantean como alternativa a la construcción de esta nueva infraestructura valorada en unos 60 millones y que ni el Gobierno central, ni el autonómico ni el local están dispuestos a asumir en solitario. El alcalde no ofreció demasiado detalles a la espera de un anuncio conjunto con la Consejería de Medio Ambiente, pero sí que se refirió a alguna intervenciones en el río a la altura de Cártama y, en lo concerniente a la capital, a la posibilidad de aumentar la profundidad del cauce bajo el puente para agrandar la capacidad de desagüe de sus ojos y de incrementar la altura del encauzamiento del arroyo de las Cañas para evitar su colapso cuando el Guadalhorce viene más cargado. «Serían actuaciones perfectamente abordables y mucho más baratas sin tener que hacer rápidamente otro puente», afirmó el primer edil, quien confió en que estas obras (sin concretar su financiación) crearían «un nuevo escenario que despeje los obstáculos que frenan la inversión en estas zonas productivas».

De la Torre sacaba a la luz algunas de las conclusiones del estudio encargado por la empresa municipal Promálaga sobre la inundabilidad del Guadalhorce durante su intervención en la asamblea del Consejo Social –órgano de participación en el que están representados partidos políticos, empresarios, sindicatos, vecinos, consumidores y colegios profesionales–, en la que se volvió a plantear la necesidad de poner en marcha un plan de acción para aumentar la capacidad de respuesta de la ciudad ante fuertes precipitaciones, poniendo el foco en las deficiencias que aún presenta el alcantarillado en la mitad de la capital debido a que las redes de pluviales comparten tuberías con las de aguas residuales.

De la Torre, ayer. :: ÑITO SALAS

Plan de acción

Pero además de ponerle deberes al Ayuntamiento, también lo hizo a las administraciones estatal y regional, al abundar en la importancia de dar solución a la inundabilidad del Guadalhorce ya que tiene bloqueado el desarrollo de nuevas zonas productivas, además de incidir en la reforestación de la cuenca del Guadalmedina. «Es necesario hacer un gran esfuerzo de consenso entre todas las administraciones para reducir el riesgo con un plan de actuación en el que se prioricen los puntos más débiles», reclamó Juan Cobalea en su papel de coordinador del grupo de trabajo del Consejo Social que ha analizado las deficiencias de Málaga ante la lluvia.

De la Torre cogió el guante comprometiéndose a «avanzar» en las cuestiones de ámbito municipal y en «colaborar» con el resto de administraciones, pero recordando que desde el encauzamiento del río Guadalhorce ejecutado entre finales del pasado siglo y comienzo del actual «el Ayuntamiento ha sido el único que ha hecho actuaciones en materia de inundabilidad». En este sentido, además de recordar los más de 4 millones que se destinarán en 2019 a obras para mejorar el drenaje de la ciudad, también rescató el convenio suscrito con el Gobierno en 2004 para obras en los arroyos por 120 millones pero que, una vez transferidas las competencias a la Junta, «sólo se han ejecutado unos 4 millones».